

**JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
PALMA DE MALLORCA**

Sentencia: 433/17

Parte recurrente: [REDACTED]

Procurador: D^a [REDACTED]

Letrado: D. [REDACTED]

Parte demandada: Ayuntamiento de Santa Eulalia Des Riu

Representada: Proc. [REDACTED]

Abogado: D. [REDACTED]

Procedimiento ordinario: 153.2015

En Palma a dos de noviembre de dos mil diecisiete

Magistrado : Alberto Palomar Olmeda

En virtud del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 19 de enero de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2015 se interpone ante este Juzgado recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del



Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio (Ibiza) del recurso extraordinario de revisión interpuesto el 23 de junio de 2015 contra los Acuerdos de fecha 30 de junio y 31 de agosto de 2011 sobre Aprobación Provisional de las normas subsidiarias

SEGUNDO.- Por Decreto de 4 de diciembre de 2015 se admite a trámite el presente recurso por el procedimiento ordinario y se reclama de la Administración demandada la remisión del correspondiente expediente.

La demanda se formaliza mediante escrito de 29 de febrero de 2016

La contestación a la demanda 26 de mayo de 2016.

TERCERO.- Por Decreto de 2 de junio de 2016 se fija la cuantía como indeterminada

Por Auto de 10 de octubre de 2016 se recibe a prueba el proceso y se ordena la práctica de las pruebas admitidas en la forma que consta en Autos.

Las partes han formulado escritos de conclusiones para los que habían sido debidamente requeridos por las partes.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley, aunque no los plazos en ella fijados, dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en este Juzgado.

El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 19 de enero de 2017 que concede la comisión de servicios sin relevación de funciones para la resolución del presente supuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso y cuantía

La desestimación por silencio administrativo del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio (Ibiza) del recurso extraordinario de revisión interpuesto el 23 de junio de 2015 contra



los Acuerdos de fecha 30 de junio y 31 de agosto de 2011 sobre Aprobación Provisional de las normas subsidiarias.

La cuantía se fija como indeterminada

SEGUNDO.- Posición de las partes

Se plantea la viabilidad jurídica del recurso de revisión interpuesto contra los acuerdos de aprobación provisional de las normas subsidiarias del Ayuntamiento.

TERCERO.- Para la resolución del presente asunto debe tenerse en consideración:

1º.- La recurrente es propietaria de una finca situada en la Parroquia San Carlos de Peralta, Municipio de Santa Eulalia del Rio (Ibiza). Los datos de todo orden de la finca constan en la demanda.

2º.- Con fecha 23 de junio de 2004, el Consell Insular de Ibiza y Formentera aprobó definitivamente la NNCC y SS provisionales que habrían de regir hasta la aprobación de la revisión del instrumento de planeamiento general que había sido suspendido el 24 de noviembre de 2003.

La recurrente señala en la demanda que con motivo de esta aprobación comprueba que su finca no es calificada como suelo urbano pasando a ser suelo rústico

Ante tal circunstancia presenta, con fecha 7 de octubre de 2004, escrito solicitando una nueva clasificación de la finca en cuestión.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia, decide enviarlo al Consell Insular de Ibiza y Formentera que lo devuelve al recurrente por considerar que se trata de un asunto de la exclusiva competencia municipal

3º.- Con fecha 30 de enero de 2006 se presentan alegaciones en el plazo formalmente establecido en las que se concluía que se apreciará la modificación urbanística que se proponía .



4º.- Con fecha 30 de octubre de 2008 se aprueban provisionalmente las NNSS de Santa Eulalia lo que genera un nuevo periodo de alegaciones que la recurrente realiza.

CUARTO.- El recurso extraordinario de revisión, cuya desestimación por silencio, constituye el objeto del presente recurso estaba regulado en aquella fecha en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual:

<<... 1. Contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano no administrativo que los dictó, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
2. Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan...>>.

Esta regulación nos permite señalar que el recurso extraordinario de revisión no es un recurso de carácter ordinario fundado en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico sino que el recurrente debe hacer un esfuerzo para adaptar su reivindicación jurídica a alguno de los supuestos específicos, concretos y tasados que se encuentran en el artículo 118 de la Ley 30/1992.

La lectura de la demanda implica que, primero, se analiza el desarrollo urbanístico de la parcela, luego, se analiza la aprobación de 23 de junio de 2004, las alegaciones al borrador de Normas Subsidiarias, la propia regulación de la parcela y algunas alegaciones adicionales en relación con la propia configuración de la parcela.



Frente a esto cabe indicar que no se dedica una referencia mínimamente suficiente sobre la procedencia legal del recurso interpuesto pese a que, como se ha dicho, es un recurso extraordinario, fundado en casos concretos y en motivos tasados que exigen del recurrente un esfuerzo procesal que permita apreciar la concurrencia del supuesto previsto.

En el presente supuesto, el recurso de revisión es, en realidad, un replanteamiento general de un conjunto de actuaciones administrativa cuya revisión debió instarse en el plazo correspondiente y con los recursos ordinarios correspondientes. No es admisible la utilización del recurso extraordinario como un elemento de revisión perpetua de las decisiones administrativas firmes y consentidas y, por tanto, lo que procede es la desestimación del presente recurso al considerarse que no se ha probado la concurrencia de ninguno de los supuestos tasados que habilitan la interposición del recurso extraordinario.

Esta consideración permite englobar las alegaciones de inadmisibilidad que se plantean en la contestación a la demanda y que no es preciso resolver teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar en relación con la propia actuación revisora del recurso de revisión en el ámbito administrativo.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional procede la imposición de costas al recurrente

De conformidad con lo indicado en el artículo 81 de la Ley Jurisdiccional procede, en su caso, la interposición de recurso de apelación contra la presente sentencia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO



Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio (Ibiza) del recurso extraordinario de revisión interpuesto el 23 de junio de 2015 contra los Acuerdos de fecha 30 de junio y 31 de agosto de 2011 sobre Aprobación Provisional de las normas subsidiarias..

Se imponen las costas al recurrente

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación.

Así lo firma Alberto Palomar Olmeda, Magistrado en comisión de servicio en el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Palma de Mallorca.

EL MAGISTRADO



**T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD
PALMA DE MALLORCA**

SENTENCIA: 00366/2019

N.I.G: 07040 45 3 2015 0001475

Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000024 /2018

Sobre PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

De D/ña. [REDACTED]

Abogado: [REDACTED]

Procurador: [REDACTED]

Contra D/ña. AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DES RIU

Abogado: [REDACTED]

Procurador: [REDACTED]

APEL·LACIÓ

Rotlle Sala núm. 24 de 2018

Actuacions Jutjat núm. 1 PO 153/2015

SENTÈNCIA núm. 366

Il·lès. Srs. Palma, a 4 de setembre de 2019

PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castellón. ----- VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el Rotlle d'apel·lació número 24 de 2018, dimanant de les actuacions número 153/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma, tramitades pel procediment ordinari, seguit entre parts, d'una, com a apel·lant, la mercantil [REDACTED] representada per la procuradora Sra. Gaya Font i assistida del lletrat Sr. M [REDACTED] ro, i, com a apel·lada, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), representada per la procuradora Sra. [REDACTED] as i dirigida pel lletrat Sr. [REDACTED].

L'objecte del recurs és la desestimació presumpta, per la ficció legal del silenci administratiu, per part de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), del recurs

extraordinari de revisió interposat per la mercantil [REDACTED] el 23 de juny de 2015 contra els acords municipals de 30 de juny i 31 d'agost de 2011, sobre aprovació provisional de les Normes Subsidiàries.

La quantia es fixà en indeterminada.

El procediment seguit ha estat el previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998.

L'Il·lm. Sr. [REDACTED] i [REDACTED], en qualitat de Magistrat ponent expressà el parer de la Sala.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r.- El Jutjat número 1 de l'Ordre Contenciós Administratiu de Palma, el dia 2 de novembre de 2017, dictà la sentència núm. 433 on va desestimar el contenciós.

2n.- Interposat el recurs d'apel·lació per part de la representació de la part actora, en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional de 1998, se li donà el tràmit processal adequat, oposant-se al mateix la direcció lletrada de la part demandada.

3r.- Per provisió s'assenyalà, per a la votació i decisió, el dia 14 de maig de 2019.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de la desestimació presumpta, per la ficció legal del silenci administratiu, per part de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), del recurs extraordinari de revisió interposat per la mercantil [REDACTED] el 23 de juny de 2015 contra els acords municipals de 30 de juny i 31 d'agost de 2011, sobre aprovació provisional de les Normes Subsidiàries.

La sentència núm. 433 de 2 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 dels de Palma, va desestimar el contenciós.

L'apel·lant, la mercantil actora, aixeca l'apel·lació a partir d'un motiu que considera determinant; a saber, la de l'admissibilitat del previ recurs extraordinari de revisió i sobre els qual esmicola els seus requisits. Es queixa, a més, i ho incorpora com a altre motiu, el de la falta de congruència de la sentència en tant en quant no és exhaustiva. Mancança d'exhaustivitat que determina que no hi hagi suficient motivació. Malgrat tot, no obstant, la realitat és que, i així es desprèn del contingut de l'apel·lació, tot gira al voltant d'un "únic" motiu, el de la possible infracció per part de la sentència d'instància dels requisits establerts a l'article 218 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Doncs bé, el primer que cal destacar, en resposta al debat, és que l'escrit d'apel·lació, amb l'excepció assenyalada de la falta de congruència, és una reproducció del que ja es va dir a la primera instància judicial.

Hem anat reiterant, de forma continuada a nombroses sentències, i aquesta reflexió és important als efectes de la forma i manera en què ve plantejada l'apel·lació que quan s'aixeca aquesta la jurisprudència ha declarat, i ho ha reiterat, que l'escrit d'apel·lació no s'ha de constrenyir a reproduir els arguments de la demanda o contestació, sinó que, i degut a què estem en presència d'un procés impugnador, es fa precís assenyalar quin són, al seu parer, els arguments de la sentència d'instància que no donen resposta adequada, per omissió, incongruència o falta de correspondència en l'aplicació del dret o la doctrina, amb el supòsit de fet plantejat.

És evident que el Tribunal *ad quem* ha de saber, i això és indispensable, les raons o motius de l'oposició a la sentència de primera instància.

En definitiva, com assenyalen les Sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 26 d'octubre de 1998 i 22 de juny de 1999, el recurs d'apel·lació té per objecte la depuració d'un resultat processal obtingut a la instància, de tal manera que l'escrit d'al·legacions de l'apel·lant "ha de contenir una crítica de la sentència impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria del pronunciamiento recaído en primera instancia". També, en aquesta línia, la Sentència del Tribunal Constitucional 1998/101, de 18

de maig, digué, que no era admissible, en aquesta fase del procés, plantejar el debat amb els mateixos termes en què ho fou a la primera instància “como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso, ello sin perjuicio claro está de recordar que el recurso de apelación es un novum iudicium”.

Cal esbrinar, aleshores, sí, efectivament, s’ha contestat amb més o menys amplitud a la resposta total de la sentència apel·lada, en les consideracions que es fan a la seva fonamentació i es surt al pas de l’aspecte que la defensa de la part apel·lant entén com a rellevants. Aquí, és més que evident, no hi surt, ni molt menys. Tot i a pesar del que, més endavant, explicarem.

SEGON.- En el 3r. dels raonaments jurídics de la sentència apel·lada es prenen en compte una sèrie de dades fàctiques que reproduïm:

“Para la resolución del presente asunto debe tenerse en consideración:

1º.- La recurrente es propietaria de una finca situada en la Parroquia San Carlos de Peralta, Municipio de Santa Eulalia del Rio [Ibiza). Los datos de todo orden de la finca constan en la demanda.

2º.- Con fecha 23 de junio de 2004, el Consell Insular de Ibiza y Formentera aprobó definitivamente la NNCC y SS provisionales que habrían de regir hasta la aprobación de la revisión del instrumento de planeamiento general que había sido suspendido el 24 de noviembre de 2003.

La recurrente señala en la demanda que con motivo de esta aprobación comprueba que su finca no es calificada como suelo urbano pasando a ser suelo rústico

Ante tal circunstancia presenta, con fecha 7 de octubre de 2004, escrito solicitando una nueva clasificación de la finca en cuestión.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia, decide enviarlo al Consell Insular de Ibiza y Formentera que lo devuelve al recurrente por considerar que se trata de un asunto de la exclusiva competencia municipal

3º.- Con fecha 30 de enero de 2006 se presentan alegaciones en el plazo formalmente establecido en las que se concluía que se apreciará la modificación urbanística que se proponía.

4º.- Con fecha 30 de octubre de 2008 se aprueban provisionalmente las NNSS de Santa Eulalia lo que genera un nuevo periodo de alegaciones que la recurrente realiza”.

Afegim nosaltres, ara, a l'esmentada relació fàctica de la sentència d'instància, que el recurs extraordinari de revisió ho fou contra l'acord municipal plenari de 24 de febrer de 2011 d'aprovació provisional de les Normes Subsidiàries, intentat comunicar-se que fou a la recurrent mitjançant sengles acords 30 de juny i 31 d'agost de 2011, ja que en aquell es desestimaven les al·legacions efectuades el 23 de gener de 2009 en el tràmit d'informació pública.

Les Normes Subsidiàries foren definitivament aprovades pel Consell Insular d'Eivissa en sessió plenària de 23 de novembre de 2011. No hi ha constància que contra l'aprovació definitiva interposés cap tipus de recurs. Esdevingué, llavors, ferm i consentida. Però, és més, ni abans tampoc, les Normes Subsidiàries provisionals de 2004 foren recorregudes donat que no era possible al tractar-se d'un acte de tràmit no susceptible de recurs.

Aprovació definitiva que va suposar la classificació com a sòl rústic de la finca propietat de la mercantil actora. Ara, mitjançant la interposició del recurs extraordinari de revisió, una vegada més, postula la classificació d'urbana.

A continuació, la sentència, en el següent fonament de dret, cita i transcriu literalment l'article 118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; per, a continuació, dur a terme els raonaments que estima adients en ordre a si era procedent o no el recurs extraordinari de revisió. En diu:

“Esta regulación nos permite señalar que el recurso extraordinario de revisión no es un recurso de carácter ordinario fundado en cualquier inírracción del Ordenamiento Jurídico sino que el recurrente debe hacer un esfuerzo para adaptar su reivindicación jurídica a alguno de los

supuestos específicos, concretos y tasados que se encuentran en el artículo 118 de la Ley 30/1992.

La lectura de la demanda implica que, primero, se analiza el desarrollo urbanístico de la parcela, luego, se analiza la aprobación de 23 de junio de 2004, las alegaciones al borrador de Normas Subsidiarias, la propia regulación de la parcela y algunas alegaciones adicionales en relación con la propia configuración de la parcela.

Frente a esto cabe indicar que no se dedica una referencia mínimamente suficiente sobre la procedencia legal del recurso interpuesto pese a que, como se ha dicho, es un recurso extraordinario, fundado en casos concretos y en motivos tasados que exigen del recurrente un esfuerzo procesal que permita apreciar la concurrencia del supuesto previsto.

En el presente supuesto, el recurso de revisión es, en realidad, un replanteamiento general de un conjunto de actuaciones administrativas cuya revisión debió instarse en el plazo correspondiente y con los recursos ordinarios correspondientes. No es admisible la utilización del recurso extraordinario como un elemento de revisión perpetua de las decisiones administrativas firmes y consentidas y, por tanto, lo que procede es la desestimación del presente recurso al considerarse que no se ha probado la concurrencia de ninguno de los supuestos tasados que habilitan la interposición del recurso extraordinario”.

La part apel·lant manté que la sentència havia d’haver trobat els motius que conforme a l’article 118 de la Llei 30/1992 emparaven la presentació del recurs extraordinari de revisió. Motius que va adduir amb la demanda i, abans, amb el contingut de l’escrit presentat a l’Ajuntament el dia 23 de juny de 2015. En ell s’especificava que encara no havia transcorregut el termini de 4 anys, doncs la desestimació de les al·legacions contra l’aprovació inicial de les Normes Subsidiàries s’havien efectuat el dies 21 de juliol i 22 de setembre de 2011 i, per tant, en la mesura que els actes fermes, a l’hora de dictar-los, s’havien fonamentat en un error de fet que resultava dels documents incorporats, suposava l’entrada en joc de l’esmentat precepte. Error que esdevindria de la classificació atorgada a la parcel·la de la mercantil que havia de ser-ho com a urbana i qualificada com a una Unitat d’Actuació Urbana independent.

TERCER.- Dient-me que la revisió és una institució jurídica que permet a l'Administració deixar sense efecte determinats tipus d'actes administratius sense necessitat d'acudir als Tribunals. Actes que han o tenen, com a característica definitiva, el de la nul·litat derivada d'un o de varis supòsits de l'article 62.1 de l'abans esmentada i reiterada Llei 30/1992.

Precisament, la revisió té, com a missió fonamental, la de facilitar la depuració dels vicis de nul·litat radical i/o absoluta per tal d'evitar, si no són recorreguts en temps i forma, la seva consolidació. És a dir, hi ha que evitar la vulneració del principi de legalitat envers el principi de seguretat jurídica, la qual cosa es possible amb la limitació del termini per exercir l'acció quan els actes administratius han generat drets a favor de tercers.

Aquí, la revisió que s'interessa no va referida a l'acte d'aprovació de l'instrument de planejament sinó a les determinacions del mateix, obviant el seu caràcter de disposició general. Però és més, va contra l'aprovació provisional que no era susceptible de recurs ordinari.

La Sala, a la sentència núm. 310 de 30 d'abril de 2015, actuacions 182 de 2014 i a amb la mateixa composició de magistrats que dicten la present, va assenyalar:

“Al ser el recurso administrativo de revisión un recurso de naturaleza extraordinaria, solamente es viable por los motivos tasados, siendo los elegidos por el recurrente las causas previstas en los apartados 1º del artículo 118 en cuanto a que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente y por la causa 2º de ese mismo artículo de la Ley 30/1992, esto es, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencian el error de la resolución recurrida”.

Continuàvem dient, després de veure que es donava el termini d'interposició:

“Por lo tanto cumplido el requisito del plazo debemos entrar en el análisis sustantivo de dicha causa primera. Y sobre este punto el recurso no ha de prosperar. En efecto el error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, como ha tenido ocasión de

decir la Jurisprudencia, es aquel que ha de versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, algo referido a una realidad totalmente independiente de toda opinión o calificación jurídica. Y además ha de deducirse del propio expediente. Por lo tanto el error de hecho no puede versar nunca sobre la interpretación o aplicación de una norma jurídica”.

La qual cosa aquí és el supòsit plantejat ja que es discrepa d’una determinada classificació, i subseqüent qualificació, del sòl, a partir de si concorrien o no les circumstàncies contemplades a la Llei 4/2008, de 14 de març, tot i a pesar que s’afirmi per la mercantil apel·lant que foren els tècnics redactors del planejament que varen incórrer en l’error de fet.

Doncs bé, malgrat el termini per interposar el recurs extraordinari de revisió no havia encara conclòs, si que s’observa, en canvi, que no es donaven els requisits previstos legalment per a la seva admissió. No s’oblidi que hi ha que diferenciar, així ho va resolent el Tribunal Suprem, entre la impugnació d’un instrument de planejament general i de l’acte d’aprovació del mateix. No hi cabia, donats els termes literals de l’article 107.3 de la Llei 30/1992, vigent llavors, la possibilitat de recurs en via administrativa.

Com va assenyalar el Tribunal Suprem a la sentència d’11 de desembre de 2009, recurs 5100/2005:

“Sobre el carácter normativo de los planes de urbanismo no es preciso abundar, baste con señalar que ésta cuestión concita un consenso general entre la doctrina científica y la jurisprudencia de este Tribunal que desde antiguo viene declarando que estamos ante normas jurídicas que tienen rango formal reglamentario. De modo que, con carácter general y lo que atañe al contenido de la norma, no es susceptible de ser recurrida en vía administrativa, como prevé el artículo 107.3 de la Ley 30/1992. E...] Ciertamente, el régimen de impugnación directa de dichos instrumentos de ordenación urbana se encuentra, como ya hemos adelantado, sometido a la expresa prohibición del artículo 107.3 de la Ley 30/1992, a cuyo tenor «(...) contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa» De modo que el indicado precepto consagra un régimen jurídico para cuestionar la legalidad de las disposiciones administrativas, los reglamentos, que excluye la interposición de recurso administrativo, por lo que ha de acudir directamente a la vía contencioso administrativa. Si bien debemos añadir, por dar un enfoque completo de la

impugnación de las disposiciones generales en vía administrativa, aunque no sea del caso abundar en ello, que se admite la impugnación indirecta de las mismas en vía administrativa, según advierte el párrafo segundo del mismo artículo 107.3 de la indicada Ley”.

Hi ha que concloure en l’afirmació, atès el contingut de l’anterior, que la interposició d’un recurs extraordinari de revisió respecte a les Normes Subsidiàries de Planejament no era possible. Vide la redacció de l’article 118 de la Llei 30 de 1992 en quant referida, exclusivament, a actes i no a disposicions.

En conseqüència, i sense més consideracions, i independentment del fet que la sentència estigui més o menys motivada, segons el que critica l’apel·lant, arribem a la desestimació del recurs d’apel·lació.

QUART.- Es fa expressa imposició de costes processals a la part apel·lant de conformitat amb l’article 139 de la Llei Jurisdiccional, amb el límit dels 500 € per tots els conceptes.

VIST els articles esmentats i d’altres disposicions de caràcter general

DECIDIM

PRIMER.- **DESESTIMAR** el present recurs d’apel·lació contra la sentència número 433 de 2 de novembre de 2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma en el si de les seves actuacions 153/2015 tramitades pel procediment ordinari, la qual **CONFIRMEM**.

SEGON.- Es fa imposició de costes processals d’aquesta alçada jurisdiccional a la part apel·lant amb el límit dels 500 € per tots els conceptes.

Contra la present, i conforme a la modificació operada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, en quant afecta a la Secció 3era del Capítol III del Títol IV integrada pels articles 86 a 93 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, hi cap recurs de cassació per a davant el Tribunal Suprem en el termini de 30



dies comptador des del següent a la notificació de la sentència amb la forma prevista als citats articles i amb més prenent-se en compte l'acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 2016, publicat que fou en el BOE núm. 162 de 6 de juliol de 2016.

Si el recurs hagués de fundar-se exclusivament en infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà competent aquest Tribunal.

Així per aquesta nostra sentència ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.- Llegida i publicada que ha estat l'anterior sentència pel Magistrat d'aquesta Sala II·Im. Sr. [REDACTED] ponent a aquest tràmit d'Audiència Pública, dono fe. El Secretari, rubricat.